

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Alfonso Gumucio Dagron

Era previsible. No salieron compromisos serios de la COP 21 en París. Nuevamente los gobiernos ofrecieron un espectáculo penoso y un documento aguado que no encara de frente los problemas de deterioro del planeta. Los representantes políticos sólo tienen como meta el horizonte de su propio paso por el poder. Lo que suceda después no les incumbe.

Los países que apuestan a energías alternativas para salvar al planeta son una minoría, pero hay noticias que alientan, sin duda. Uruguay ocupa el primer lugar en inversión del PIB en energías renovables, con una política cuyo horizonte es abandonar la dependencia de combustibles fósiles en el corto plazo. Las energías renovables (viento, biomasa y energía solar) ya proporcionan más del 90% de la energía que consume el país, según la información presentada en la COP 21 por Ramón Méndez, quien está a cargo de ese sector. Otros países pequeños hacen esfuerzos similares. Nicaragua apuesta a la energía geotérmica de sus volcanes, al igual que Islandia. Costa Rica tiene como meta para el 2021 generar el 100% de su energía con plantas hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas. Con lo que generan las represas de Muela, Lesotho no solamente cubre el 100% de sus necesidades sino que además le vende el excedente a Sudáfrica.

Las economías más desarrolladas saben que no pueden depender indefinidamente de carburantes fósiles, y no porque hayan tomado conciencia del daño que se hace a la naturaleza, sino por razones puramente económicas. En California se han instalado algunas de las plantas de energía solar más grandes del mundo y hay una política estatal que apuesta a las energías renovables, en coincidencia con los intereses de grandes empresas privadas que tienen que pagar impuestos por las toneladas de carbono (CO₂) que producen. Estas empresas están reduciendo el costo de lo que deben pagar, mediante la entrega gratuita de paneles solares a familias de bajos recursos. En Dinamarca, Holanda y otros países con costa se puede ver cómo nacen del mar altos y espigados molinos de viento que alimentan de energía eléctrica a millones de personas. Los complejos de paneles solares nacen en países industrializados, no siempre como resultado de políticas de Estado, sino por iniciativa de empresas privadas o de los propios ciudadanos. Muchos países promueven las iniciativas comunitarias de dotarse de una energía más barata y menos contaminante. Cada vez más está en el imaginario de los ciudadanos el dotarse de paneles solares para no depender de los altos costos de la energía eléctrica suministrada por el Estado o empresas privadas.

El sol es gratis, nos pertenece a todos y no lo aprovechamos suficientemente, aunque en décadas recientes hay más personas que adoptan la energía solar como fuente de electricidad. La paradoja es que en lugar de alentar la iniciativa de familias, comunidades y empresas que invierten en paneles solares para independizarse de la red eléctrica, el gobierno español, que ya no sabe de dónde sacar dinero para salir de su crisis económica y política, ha decretado que todos los ciudadanos y empresas que producen energía solar deben pagar un “peaje” porque afectan las ganancias de las empresas operadoras de electricidad. Por supuesto, le ha llovido palos hasta debajo de la lengua al ministro de Industria, José Manuel Soria, promotor del despropósito.

Mientras decenas de funcionarios corruptos evaden la justicia durante años, el gobierno español se muestra implacable con los ciudadanos que apuestan a la energía solar. Ahí sí, la policía actúa diligentemente. El 15 de octubre pasado la Guardia Civil apresó como si fuera narcotraficante o feminicida (que abundan en España), a un vecino de Arévalo (Ávila) que tenía sobre el techo de su casa dos paneles fotovoltaicos que fueron inmediatamente incautados, sin que medie ningún proceso judicial. De acuerdo a la ley de “impuesto al sol” del gobierno de Rajoy el detenido podría enfrentar una multa de hasta seis millones de Euros por “afectar los intereses de las empresas eléctricas”, ¿qué tal?

Para la organización Greenpeace se trata de una “clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética”. Al pagar ese impuesto el usuario que invirtió en células fotovoltaicas termina pagando más de lo que pagaba cuando dependía de la red de electricidad. Las reacciones ante la medida no se han hecho esperar, los ciudadanos se resisten a registrar sus sistemas de energía solar como manda la nueva ley, y otros, como la Fundación Desarrollo Sostenible, promueven acciones directas: cortar completamente los cables de la red de energía eléctrica y autoabastecerse el 100% con energías alternativas.

La revista norteamericana *Forbes* se burló de la arbitrariedad del gobierno de Rajoy. Dice el articulista Kelly Phillips Erb: “Parece que los miembros del gobierno se quedaron sin ideas, miraron al cielo un día y pensaron ‘¡Ya lo tengo! ¡Pongamos un impuesto al sol!’”

Alfonso Gumucio Dagron (La Paz, 1950). Boliviano, escritor, periodista, cineasta, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Tiene veinte libros publicados (poesía, cuento, testimonio, y ensayo), los más recientes de ellos *Cruentos* (2012) y *El ingeniero descalzo* (2014). Su testimonio sobre el golpe militar de García Meza, *La Máscara del Gorila* (1982), obtuvo en México el Premio Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Ha dirigido una docena de películas documentales sobre temas sociales y culturales. Su trabajo en comunicación lo ha llevado por América Latina y el Caribe, África, Asia y el Pacífico Sur.